

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

WT/DSB/M/147
1º de julio de 2003

(03-3502)

Órgano de Solución de Diferencias
15 de abril de 2003

ACTA DE LA REUNIÓN

celebrada en el Centro William Rappard el 15 de abril de 2003

Presidente: Sr. Shotaro Oshima (Japón)

<u>Asuntos tratados</u>	<u>Página</u>
1. Vigilancia de la aplicación de las recomendaciones adoptadas por el OSD.....	2
a) Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos: Informe de situación presentado por los Estados Unidos.....	2
b) Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916: Informe de situación presentado por los Estados Unidos.....	2
c) Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998: Informe de situación presentado por los Estados Unidos	4
d) Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón: Informe de situación presentado por los Estados Unidos	5
2. Uruguay - Régimen fiscal aplicado a determinados productos.....	5
a) Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Chile.....	5
3. Estados Unidos - Exámenes por extinción de los derechos antidumping impuestos a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina.....	6
a) Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina	6
4. Estados Unidos - Investigación de la Comisión de Comercio Internacional respecto de la madera blanda procedente del Canadá.....	10
a) Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por el Canadá	10
5. Argentina - Medida de salvaguardia definitiva sobre las importaciones de duraznos en conserva.....	11
a) Informe del Grupo Especial	11
6. Estados Unidos - Subvenciones al algodón americano (upland).....	12
a) Declaración del Brasil con respecto al Anexo V del Acuerdo SMC.....	12
7. Candidaturas propuestas para su inclusión en la lista indicativa de expertos gubernamentales y no gubernamentales que pueden ser integrantes de grupos especiales.....	20
8. Declaración del Presidente con respecto a una comunicación del Órgano de Apelación sobre el proyecto de modificaciones de los <i>Procedimientos de trabajo para el examen en apelación</i>	20

1. Vigilancia de la aplicación de las recomendaciones adoptadas por el OSD

- a) Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos: Informe de situación presentado por los Estados Unidos (WT/DS160/18/Add.14)
- b) Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916: Informe de situación presentado por los Estados Unidos (WT/DS136/14/Add.13 - WT/DS162/17/Add.14)
- c) Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998: Informe de situación presentado por los Estados Unidos (WT/DS176/11/Add.7)
- d) Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón: Informe de situación presentado por los Estados Unidos (WT/DS184/15/Add.7)

1. El Presidente recuerda que el párrafo 6 del artículo 21 del ESD exige que "[a] menos que el OSD decida otra cosa, la cuestión de la aplicación de las recomendaciones o resoluciones será incluida en el orden del día de la reunión que celebre el OSD seis meses después de la fecha en que se haya establecido el período prudencial de conformidad con el párrafo 3 y se mantendrá en el orden del día de sus reuniones hasta que se resuelva". El Presidente propone que se examinen por separado los cuatro subpuntos a los que acaba de referirse.

- a) Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos: Informe de situación presentado por los Estados Unidos (WT/DS160/18/Add.14)

2. El Presidente señala a la atención de los presentes el documento WT/DS160/18/Add.14 en el que figura el informe de situación presentado por los Estados Unidos sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del OSD en el asunto relativo al artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos.

3. El representante de los Estados Unidos dice que su país presentó el 3 de abril de 2003 un nuevo informe de situación sobre esta diferencia, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 21 del ESD. Como se indica en ese informe, los Estados Unidos y las CE han buscado una solución positiva y mutuamente aceptable de la diferencia. La Administración de los Estados Unidos está realizando importantes progresos sobre esta cuestión con el Congreso con miras a concertar una solución mutuamente aceptable que sea compatible con las normas de la OMC. Los Estados Unidos esperan que las partes en la diferencia notifiquen pronto al OSD toda información adicional en este sentido.

4. El representante de las Comunidades Europeas dice que las CE acogen con satisfacción la declaración positiva formulada por los Estados Unidos y esperan con interés que se realicen nuevos progresos sobre este asunto.

5. El OSD toma nota de las declaraciones y acuerda volver a ocuparse de esta cuestión en su próxima reunión ordinaria.

- b) Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916: Informe de situación presentado por los Estados Unidos (WT/DS136/14/Add.13 - WT/DS162/17/Add.14)

6. El Presidente señala a la atención de los presentes el documento WT/DS136/14/Add.14 - WT/DS162/17/Add.14 en el que figura el informe de situación presentado por los Estados Unidos sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del OSD con respecto al asunto relativo a la Ley Antidumping de 1916 de los Estados Unidos.

7. El representante de los Estados Unidos indica que su país presentó el 3 de abril de 2003 otro informe de situación sobre esta diferencia, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 21 del ESD. Como se indica en ese informe, el 4 de marzo de 2003 se había presentado a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos una propuesta de legislación que derogaría la Ley de 1916 (H.R. 1073). La Administración de los Estados Unidos continuará trabajando con el Congreso para seguir avanzando hacia la solución de esta diferencia con las CE y el Japón.

8. El representante de las Comunidades Europeas dice que las CE desean recalcar de nuevo que la aplicación adecuada en este caso implica no sólo que la Ley Antidumping de 1916 sea derogada, sino también que se ponga fin a los casos judiciales pendientes. Recuerda que en julio de 2001, las CE aceptaron conceder a los Estados Unidos un plazo adicional para la aplicación, en el entendimiento expreso de que la legislación derogatoria pondría fin a los procesos judiciales pendientes. Una vez más, en febrero de 2002, las CE accedieron a suspender el procedimiento de arbitraje con respecto a su solicitud de retorsión, porque el Congreso de los Estados Unidos estaba examinando una propuesta de derogación de la Ley Antidumping de 1916 y de terminación de los casos pendientes. Actualmente hay empresas de las CE involucradas en tres causas presentadas en el marco de la Ley Antidumping de 1916. Dos de esas causas se iniciaron con posterioridad al plazo inicial para derogar la Ley Antidumping de 1916. Evidentemente es inadmisibles el hecho de que las empresas de las CE estén soportando considerables costas procesales y que podrían resultar condenadas por demandas amparadas en una legislación que ha sido claramente condenada y que debería haberse derogado hace mucho tiempo. Las CE instan una vez más a los Estados Unidos a que pongan fin definitivamente a esta diferencia mediante la derogación de la Ley Antidumping de 1916 y la terminación de los procesos judiciales en curso.

9. La representante del Japón dice que su país observa con gran preocupación que los Estados Unidos, en su informe de situación y en sus declaraciones en las reuniones del OSD, no han hecho ninguna referencia a la manera exacta en que se proponen aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD en este procedimiento, ni al grado de urgencia que asignan a dicha aplicación. Recuerda que los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación fueron adoptados hace dos años y medio. La persistente falta de aplicación por los Estados Unidos sólo provocará la erosión de la confianza en el sistema de solución de diferencias de la OMC. Los Estados Unidos tienen que derogar la Ley Antidumping de 1916 por su incompatibilidad con la OMC lo antes posible en el primer período de sesiones del Congreso en su 108ª legislatura, actualmente en curso. Es lamentable que la propuesta de legislación presentada en la Cámara de Representantes el 4 de marzo de 2003 no afectará a los procesos pendientes. Esto significa que, incluso con la aprobación de esta legislación, las empresas japonesas investigadas seguirán sufriendo daños importantes, con inclusión de elevadas costas procesales. El Japón dejó absolutamente claro que el proyecto de ley por el que se deroga la Ley Antidumping de 1916 tiene que tener efectos retroactivos para poner fin a los casos pendientes. Por consiguiente, no es aceptable el contenido del proyecto de ley del 4 de marzo. Esta situación es bastante desconcertante, pues el proyecto de ley con efectos retroactivos de hecho fue presentado en la 107ª legislatura. El Japón pide que la Administración de los Estados Unidos coordine su labor de manera mucho más eficaz con el Congreso y presente al OSD un informe específico sobre la marcha de sus esfuerzos dirigidos a garantizar la presentación y aprobación de proyectos de ley de derogación con verdaderos efectos retroactivos. Una vez más, el Japón insta firmemente a los Estados Unidos a que apliquen correctamente y lo antes posible las recomendaciones y resoluciones del OSD, y recuerda a los Estados Unidos que el Japón se reserva el derecho a suspender concesiones u otras obligaciones en este caso.

10. El OSD toma nota de las declaraciones y acuerda volver a ocuparse de esta cuestión en su próxima reunión ordinaria.

- c) Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998: Informe de situación presentado por los Estados Unidos (WT/DS176/11/Add.7)

11. El Presidente señala a la atención de los presentes el documento WT/DS176/11/Add.7 en el que figura el informe de situación presentado por los Estados Unidos sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del OSD en el asunto relativo a la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998.

12. El representante de los Estados Unidos dice que su país presentó el 3 de abril de 2003 un informe de situación sobre esta diferencia, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 21 del ESD. La Administración de los Estados Unidos continuará trabajando con el Congreso con miras a resolver la diferencia.

13. El representante de las Comunidades Europeas dice que las CE tienen la firme esperanza de no tener que añadir este caso a la lista de casos en los que los Estados Unidos no han aplicado las recomendaciones y resoluciones. Señala que ahora los Estados Unidos tienen poco más de dos meses para asegurarse de que la aplicación se haga efectiva en el nuevo plazo. Las CE desean hacer hincapié en que están pendientes en el Congreso de los Estados Unidos dos proyectos de ley de derogación del Artículo 211. También desean dejar constancia de la posición de las CE con respecto a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas. El Grupo Especial se había basado en las afirmaciones realizadas por representantes de los Estados Unidos de que el Artículo 211 no se aplicaría a una nueva marca de fábrica o de comercio después de que una anterior, a la cual podría haberse aplicado el Artículo 211, hubiera sido abandonada. Esta interpretación no ha sido aceptada por los tribunales federales estadounidenses, que se negaron a interpretar que el Artículo 211 preveía una excepción respecto de los casos de abandono. Por lo tanto, las CE no pueden aceptar la posición de la Administración de los Estados Unidos de que no hace falta aclarar que el Artículo 211 no se aplica en los casos en que la marca de fábrica o de comercio haya sido abandonada por el titular original.

14. El representante de los Estados Unidos expresa su deseo de responder a la última cuestión planteada por las CE. Como afirmaron los Estados Unidos en la reunión anterior del OSD, si las CE conocen decisiones judiciales sobre el Artículo 211 que no han sido notificadas al Grupo Especial o al Órgano de Apelación, los Estados Unidos desean saber cuáles son. Por lo que a los Estados Unidos se refiere, las partes han informado plenamente al Grupo Especial y al Órgano de Apelación sobre las decisiones judiciales relacionadas con el Artículo 211. Por consiguiente, no se puede decir que esas decisiones representan nueva información. En todo caso, los Estados Unidos desean reiterar que las recomendaciones y resoluciones del OSD en este caso no se refieren a la cuestión del abandono.

15. La representante de Cuba dice que su delegación toma nota del informe de situación presentado por los Estados Unidos y, una vez más, desea reiterar que la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte de los Estados Unidos socava la credibilidad del OSD. Cuba insta a los Estados Unidos a que cumplan las recomendaciones en relación con el Artículo 211 dentro del plazo del 30 de junio de 2003. Su país desea asociarse a la declaración formulada por las CE con respecto a la cuestión de la no aplicación del Artículo 211 a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas.

16. El OSD toma nota de las declaraciones y acuerda volver a ocuparse de esta cuestión en su próxima reunión ordinaria.

- d) Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón: Informe de situación presentado por los Estados Unidos (WT/DS184/15/Add.7)

17. El Presidente señala a la atención de los presentes el documento WT/DS184/15/Add.7 en el que figura el informe de situación presentado por los Estados Unidos sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del OSD con respecto al asunto relativo a las medidas antidumping de los Estados Unidos sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón.

18. El representante de los Estados Unidos dice que su país presentó el 3 de abril de 2003 un informe de situación sobre esta diferencia, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 21 del ESD. Con respecto a las recomendaciones y resoluciones del OSD que no fueron abordadas en la determinación sobre derechos antidumping formulada el 22 de noviembre de 2002 por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, su país sigue trabajando con el Congreso con miras a resolver la diferencia. El 14 de abril de 2003, el Embajador Zoellick y el Secretario de Comercio Evans enviaron al Congreso de los Estados Unidos una carta en la que respaldaban las modificaciones específicas del artículo 735(c)(5) de la Ley Arancelaria de 1930 con miras a aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. La Administración de los Estados Unidos procurará hacer que se aprueben estas modificaciones.

19. La representante del Japón dice que, como ha indicado su país en reuniones anteriores del OSD, el Japón no ha opuesto objeciones a la prórroga del plazo prudencial de este procedimiento solamente porque los Estados Unidos se han comprometido a aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD, e incluso a lograr la presentación y aprobación de la legislación necesaria en el primer período de sesiones de la 108ª legislatura del Congreso. La persistente y múltiple falta de aplicación por uno de los principales participantes en la OMC y uno de los usuarios más frecuentes del sistema de solución de diferencias representa una amenaza grave y real a la credibilidad de la OMC en general. El Japón toma nota de la declaración formulada por los Estados Unidos en la presente reunión y confía en que recibirá más detalles en relación con la carta que se ha enviado al Congreso de los Estados Unidos. El Japón espera con interés que los Estados Unidos procedan a la pronta aplicación en este asunto y que sostengan consultas estrechas y sustantivas con el Japón sobre la situación y el contenido de la aplicación.

20. El OSD toma nota de las declaraciones y acuerda volver a ocuparse de esta cuestión en su próxima reunión ordinaria.

2. Uruguay - Régimen fiscal aplicado a determinados productos

- a) Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Chile (WT/DS261/4)

21. El Presidente señala a la atención de los presentes la comunicación de Chile, contenida en el documento WT/DS261/4.

22. El representante de Chile afirma que, a juicio de su país, el Impuesto Específico Interno ("IMESI") aplicado a la primera enajenación e importación de ciertos bienes de consumo como bebidas, vinos, licores, tabaco, cigarrillos, automóviles, lubricantes y combustibles es incompatible con las obligaciones asumidas por el Uruguay en la OMC en materia de trato nacional y nación más favorecida. Recuerda que el IMESI está establecido en el capítulo 11 del Texto Ordenado de 1996, modificado por el Decreto 200/002 de junio de 2002 y reglamentado por el Decreto 96/990 de febrero de 1990. Se aplica semestralmente a través de decretos del Ministerio de Economía y Finanzas y cada dos meses a través de Resoluciones de la Dirección General Impositiva. Dicho régimen se aplica de diversas formas pero en general, la fórmula de cálculo se basa en precios fictos, es decir, precios

fijados por la autoridad uruguaya, en la mayoría de los casos, en forma arbitraria. Estos precios fictos elevan la base imponible en comparación al precio real de venta de los bienes. En su solicitud, Chile ejemplifica la aplicación del IMESI a cigarrillos, tabacos, vinos y licores. En el caso de cigarrillos, cervezas, jugos y aguas minerales, no sólo se determina un precio ficto para los productos nacionales sino que a los productos similares importados se les duplica dicho precio ficto. Es lo que en el Uruguay se conoce como el "Doble IMESI", y representa claramente una discriminación en materia tributaria contraria al artículo III del GATT de 1994. Además, en el caso de los cigarrillos importados el precio ficto se determina de manera diferente según el origen del producto, es decir, una clara violación del artículo I del GATT de 1994. En la práctica, esto se traduce en una prohibición de importación.

23. Recuerda que el 18 de junio de 2002, Chile solicitó consultas con el Uruguay, que se realizaron en Montevideo el 23 de julio. En dicha reunión se pudo intercambiar información y Chile tomó nota de la posición del Uruguay. También se acordó otorgar un tiempo a la autoridad uruguaya para evaluar y plantear una solución a la preocupación de Chile. Para ello, Chile tuvo en consideración la difícil situación financiera en que se encontraba el Uruguay. Sin embargo, habiendo transcurrido casi nueve meses desde esa fecha, el Uruguay sigue manteniendo un régimen tributario incompatible con sus obligaciones en la OMC. Recientemente se le hizo llegar a Chile el texto de un Decreto presidencial que modifica el IMESI. El propósito de ese Decreto sería igualar el tratamiento tributario interno entre los cigarrillos importados y los nacionales. Al parecer dicho Decreto todavía no estaría vigente. Si bien Chile está evaluando las consecuencias prácticas del Decreto en el mercado uruguayo, su reacción preliminar es que no corrige totalmente la discriminación contra los cigarrillos chilenos. Por otro lado, la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Chile incluye otros bienes que también sufren discriminación tributaria interna y en relación con terceros países. Por lo tanto, Chile se ha visto obligado a solicitar el establecimiento de un grupo especial, con el mandato uniforme enunciado en el artículo 7 del ESD, para que determine que el IMESI, establecido en las disposiciones legales mencionadas y demás disposiciones complementarias y/o modificatorias, es contrario a los artículos I y III del GATT de 1994. Chile quisiera reiterar que, sin perjuicio de esta solicitud, está siempre abierto a buscar una solución bilateral efectiva que sea compatible con la OMC.

24. El representante del Uruguay señala que el 23 de julio de 2002 se celebraron en Montevideo las consultas solicitadas por Chile en relación con la aplicación del Impuesto Específico Interno (IMESI) por parte del Uruguay. En dichas consultas participaron asimismo las CE y México. A juicio del Uruguay, las consultas y los contactos bilaterales entre el Uruguay y Chile constituían el marco adecuado para la resolución del tema, dada la voluntad de diálogo y entendimiento demostrada por ambos países durante los mismos. Por consiguiente, el Uruguay lamenta que Chile haya decidido optar por el establecimiento de un grupo especial para examinar este tema, interrumpiendo la vía de diálogo que el Uruguay había privilegiado. Los motivos y argumentos esgrimidos por Chile respecto del IMESI aplicado por el Uruguay son inadmisibles por no encontrarse debidamente fundados. Por esa razón, el Uruguay no está en condiciones de dar su consentimiento a la solicitud de Chile de que se establezca un grupo especial con respecto a esta cuestión.

25. El OSD toma nota de las declaraciones y acuerda volver a ocuparse de esta cuestión.

3. Estados Unidos - Exámenes por extinción de los derechos antidumping impuestos a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina

a) Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina (WT/DS268/2)

26. El Presidente señala a la atención de los presentes la comunicación de la Argentina, contenida en el documento WT/DS268/2.

27. El representante de la Argentina dice que su país agradece esta oportunidad de exponer sus puntos de vista con respecto a la grave situación de acceso al mercado de los Estados Unidos en que se encuentra una empresa argentina debido al mantenimiento de una medida antidumping por parte de los Estados Unidos como resultado de un examen de revisión por extinción llevado a cabo entre los meses de julio de 2000 y julio de 2001. La empresa argentina afectada, Siderca, es líder en la producción y exportación de una amplia gama de productos tubulares de acero, especialmente en lo que se refiere al segmento de la producción de gas y petróleo, y exporta más del 70 por ciento de su producción a más de 60 países. En términos de la situación particular de la empresa, la Argentina considera que tanto las constataciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que respaldan la realización de un examen por extinción expeditivo, como las constataciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio Internacional (USITC), con respecto a la necesidad del mantenimiento de la medida antidumping, son incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos ante la OMC. Asimismo, el Gobierno de la Argentina considera que ciertos aspectos de las leyes, reglamentaciones, políticas y procedimientos de los Estados Unidos relacionados con la administración de los exámenes de revisión por extinción son incompatibles con las obligaciones de ese país ante la OMC. En dicho contexto, y sin reiterar todos los reclamos que se formulan en la solicitud contenida en el documento WT/DS268/2, es relevante señalar algunos aspectos.

28. La Argentina observa que Siderca no registra embarques al mercado estadounidense desde 1995. El derecho de defensa de Siderca fue menoscabado al aplicársele la vía expeditiva, pues dicha empresa había manifestado su plena voluntad de participar en el proceso de revisión. La fundamentación de la aplicación de la vía expeditiva, basada en el hecho de que los embarques de la empresa investigada no alcanzaban el 50 por ciento de las exportaciones totales del producto provenientes de la Argentina, no resulta suficiente a la luz del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping, particularmente considerando que dicha constatación se basó en un solo embarque que no fue realizado por Siderca. Aún si se asumiera la compatibilidad del requisito del 50 por ciento de las exportaciones totales exigido por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos a fin de no imponer un procedimiento expeditivo, la Administración estadounidense nunca pudo identificar el origen del embarque en cuestión. La falta de identificación de dicho embarque hace aún más cuestionable la aplicación de la vía expeditiva. En el proceso de examen por extinción, se equipara el concepto de "respuesta no adecuada" a la figura de "desistimiento" en la participación en dicho proceso. Se configura así una presunción de repetición del dumping virtualmente irrefutable en los hechos e incompatible con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping. Las constataciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos con respecto a la probabilidad de repetición del dumping resultan insuficientes. Se basan en que el hecho de que la ausencia de importaciones de Siderca luego de la aplicación de la medida antidumping da lugar a la presunción de que si la medida es revocada es probable la repetición del dumping con el margen determinado en la investigación original (1,36 por ciento). En ningún momento se llevó a cabo una nueva investigación de tipo prospectivo y basada en evidencia positiva. Las constataciones de la USITC no se basaron en evidencia positiva y tampoco pueden sustentarse en la evidencia contenida en el expediente. La USITC utilizó criterios acumulativos con respecto al daño aún cuando Siderca no registraba exportaciones de ningún tipo durante el período posterior a la aplicación de la medida antidumping. Más aún, la USITC no aplicó adecuadamente los requisitos sustantivos del Acuerdo Antidumping en materia de daño. La USITC no analizó adecuadamente las condiciones de competencia en el mercado internacional para empresas de las características de Siderca, ni tampoco el hecho de que, con la excepción de los Estados Unidos, dicha empresa no enfrenta restricciones de acceso significativas en sus otros mercados.

29. La Argentina considera que luego de cinco años de aplicación de una medida antidumping la obligación principal es la terminación o revocación de la misma. El mantenimiento de la medida debe constituir la excepción y, como tal, debe estar respaldada por evidencia positiva surgida en el contexto de una nueva investigación de carácter eminentemente prospectivo. Por el contrario, la Argentina

entiende que el mantenimiento indefinido de una medida antidumping sobre la base de una interpretación inapropiada despoja de contenido útil a las obligaciones principales del párrafo 3 del artículo 11, particularmente si las constataciones efectuadas: i) se basan en criterios que constituyen una presunción irrefutable con respecto a la recurrencia del daño y del dumping; ii) no se fundamentan en una nueva investigación que permita el pleno derecho de defensa; iii) se basan casi exclusivamente en parámetros resultantes de la investigación original; y iv) no se apoyan en un análisis suficiente del nuevo contexto en el que se lleva a cabo el procedimiento de examen. Consecuentemente, y por las razones expuestas, la Argentina solicita que, conforme a lo dispuesto por el artículo XXIII del GATT de 1994, el artículo 6 del ESD y el artículo 17 del Acuerdo Antidumping, el OSD establezca un grupo especial con mandato uniforme con el propósito de examinar y constatar que las medidas aquí identificadas son incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo Antidumping, el GATT de 1994 y el Acuerdo de la OMC.

30. El representante de los Estados Unidos comienza por señalar que su país, según lo que discierne de la solicitud de establecimiento de un grupo especial, ve con satisfacción el hecho de que la Argentina haya abandonado sus alegaciones con respecto a la iniciación de los exámenes por extinción y de la norma *de minimis* aplicable a estos exámenes. Los Estados Unidos han sostenido desde hace mucho que estos aspectos particulares de su sistema de exámenes por extinción son compatibles con las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC, y el Órgano de Apelación así lo ha acordado en su informe sobre el asunto relativo a los productos de acero procedentes de Alemania (WT/DS213/AB/R). No obstante, decepciona a los Estados Unidos el hecho de que la Argentina haya decidido llevar adelante este asunto solicitando el establecimiento de un grupo especial para que examine otras alegaciones. Con respecto a las alegaciones cuyo carácter se puede discernir, los Estados Unidos confían en que se constatará que la legislación estadounidense, tanto en sí misma como en su aplicación al examen por extinción relativo a los OCTG procedentes de la Argentina, es compatible con las obligaciones de los Estados Unidos en el marco de la OMC. Sin embargo, desafortunadamente hay algunas alegaciones cuyo carácter los Estados Unidos no pueden discernir a partir de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina. Habida cuenta de que el Órgano de Apelación ha indicado que un Miembro puede renunciar a su derecho a objetar por deficiencias una solicitud de establecimiento de un grupo especial si no plantea sus preocupaciones cuando el OSD examina la solicitud, los Estados Unidos desean exponer concierzo detenimiento las deficiencias que han identificado en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina.

31. El problema principal de los Estados Unidos tiene que ver con las alegaciones presentadas por la Argentina aparte de las que aparecen en las secciones A y B de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por ese país. Concretamente, en el primer párrafo después del apartado 4 de la sección B de su solicitud de establecimiento de un grupo especial, la Argentina declara que está impugnando "ciertos aspectos" de determinadas leyes, reglamentaciones, políticas y procedimientos de los Estados Unidos. Si bien la Argentina procede a identificar las leyes, reglamentaciones, políticas y procedimientos, nunca señaló qué aspectos de estos instrumentos le parecen objetables. Por añadidura, la Argentina adujo entonces que estos "aspectos" no identificados de determinadas leyes, reglamentaciones, políticas y procedimientos de los Estados Unidos infringían múltiples artículos del Acuerdo Antidumping, el GATT de 1994 y el Acuerdo de la OMC, la mayoría de los cuales contienen múltiples obligaciones separadas. La Argentina nunca identificó las disposiciones concretas de la normativa estadounidense que infringían disposiciones específicas de los acuerdos citados, disposiciones que tampoco identificó. En consecuencia, los Miembros tienen que preguntarse a qué se refiere esta parte de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina. O, si vemos el problema desde el punto de vista del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, los Miembros aún no tienen respuesta a la pregunta ¿cuáles son los fundamentos jurídicos de la reclamación?

32. El problema es menos grave en el caso de las secciones A y B de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina, porque en la mayoría de los casos ese país identificó adecuadamente la medida en cuestión y los apartados concretos de los artículos que la medida supuestamente infringía. Sin embargo, desafortunadamente no lo hizo en todas las ocasiones. En los puntos 1 y 2 de la sección B de su solicitud de establecimiento de un grupo especial, la Argentina alega una violación del artículo 6 del Acuerdo Antidumping en su totalidad. Esta alegación parece improbable y la falta de precisión no se justifica puesto que en otros casos la Argentina ha identificado los párrafos concretos del artículo 6 que a su juicio se han infringido. De modo similar, en el punto 3 de la sección B, la Argentina alega una violación del artículo 3 del Acuerdo Antidumping en su totalidad. Esta amplia alegación también parece improbable e injustificada. El resultado neto es que, en relación con una gran parte de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina, los Estados Unidos simplemente no pueden discernir los fundamentos jurídicos de la reclamación y consideran que si se estableciera un grupo especial sobre la base de la actual solicitud de establecimiento, el grupo especial estaría de acuerdo con los Estados Unidos. Por consiguiente, lo adecuado sería que la Argentina retirara su actual solicitud de establecimiento de un grupo especial y presentara una nueva solicitud que se ajustara a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD y permitiera a los Estados Unidos y a todos los demás Miembros discernir adecuadamente los fundamentos jurídicos de la reclamación de la Argentina.

33. Dicho lo anterior, los Estados Unidos encuentran otro problema respecto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina. En términos sencillos, algunos de los instrumentos señalados por la Argentina no constituyen "medidas" que se puedan impugnar. Dos de los instrumentos en cuestión son, respectivamente: i) la Declaración de Acción Administrativa (o "SAA") que acompaña al Acta en que se incorporan los Acuerdos de la Ronda Uruguay; y ii) el Sunset Policy Bulletin del Departamento de Comercio por extinción. Dado que estos dos instrumentos ya han sido examinados o están siendo examinados por grupos especiales, los Estados Unidos no reiterarán su posición sino que se limitarán a afirmar que a su juicio estos instrumentos no constituyen "medidas". Con todo, existe un tercer instrumento que no es una "medida" y que ha sido adecuadamente objeto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial. Se trata del instrumento al que la Argentina se refirió como "Determination to Expedite". Esta revisión por la vía expeditiva, que la Argentina clasifica como "medida", en realidad no es más que una resolución preliminar e interlocutoria adoptada por un funcionario del Departamento de Comercio durante el examen por extinción relativo a los OCTG procedentes de la Argentina. Efectivamente, como se indica en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina, la denominada "medida" no es más que un memorando interno del Departamento de Comercio por el que se anuncia la decisión de llevar a cabo un examen expeditivo, en lugar de un examen por extinción completo. En realidad, no hay diferencia entre esto y cualquiera de los innumerables tipos de decisiones que se adoptan durante una investigación o examen antidumping, como la decisión de realizar o no la verificación *in situ*, prorrogar el plazo para la determinación preliminar o definitiva, limitar el número de exportadores examinados, etc., etc. Son cientos, quizás miles, las decisiones preliminares independientes que van conformando lo que eventualmente se convierte en una medida antidumping. Sin embargo, el párrafo 4 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping establece claramente que sólo ciertos tipos específicos de medidas pueden ser objeto del procedimiento de un grupo especial. Éstas no comprenden las decisiones preliminares. Por lo tanto, está claro que la Argentina no puede impugnar la "Determination to Expedite" por no ser ésta una medida propiamente dicha.

34. Por último, los Estados Unidos señalan que, si bien la Argentina dice solicitar el establecimiento de un grupo especial con el mandato uniforme, su solicitud en realidad consiste en que el OSD establezca un grupo especial con un mandato que aparentemente encomienda al Grupo Especial que "constate" que las supuestas "medidas" son incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos en el marco de la OMC. Sorprendentemente, la Argentina pide al OSD un mandato

que prejuzgaría la solución de esta diferencia. Éste no es el mandato uniforme. En resumen, la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por la Argentina no es suficiente porque no presenta el problema con claridad y porque pretende impugnar instrumentos que no constituyen "medidas". Además, el mandato que pide la Argentina no es adecuado. Por consiguiente, los Estados Unidos no pueden aceptar el establecimiento de un grupo especial.

35. El OSD toma nota de las declaraciones y acuerda volver a ocuparse de esta cuestión.

4. Estados Unidos - Investigación de la Comisión de Comercio Internacional respecto de la madera blanda procedente del Canadá

a) Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por el Canadá (WT/DS277/2)

36. El Presidente señala a la atención de los presentes la comunicación del Canadá, contenida en el documento WT/DS277/2.

37. El representante del Canadá dice que, como saben los Miembros, la industria de la madera blanda es de importancia vital para la economía del Canadá, con exportaciones anuales a los Estados Unidos por un valor aproximado de 10.000 millones de dólares EE.UU. Existen unos 800 aserraderos de madera blanda en todo el Canadá y el sector da empleo a aproximadamente 180.000 trabajadores. Trescientas comunidades canadienses dependen del sector forestal para su supervivencia económica. El Canadá ya ha solicitado el establecimiento de grupos especiales respecto de las determinaciones en materia de derechos compensatorios o antidumping formuladas por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos respecto de la madera blanda procedente del Canadá. El Canadá solicita ahora el establecimiento de un grupo especial con respecto a la determinación de la existencia de amenaza de daño formulada por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC). En cuanto a los aspectos específicos de este caso, el orador señala que el 20 de diciembre de 2002, el Canadá solicitó consultas con los Estados Unidos con respecto a la investigación de la USITC en el asunto relativo a la madera blanda procedente del Canadá y a los derechos antidumping y compensatorios definitivos aplicados como consecuencia de la determinación final de existencia de amenaza de daño formulada por la USITC el 16 de mayo de 2002. Las consultas, que se celebraron el 22 de enero de 2003, no resolvieron la diferencia. Como indica en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, el Canadá considera que los Estados Unidos infringieron diversas obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo Antidumping, el Acuerdo SMC y el GATT de 1994. Entre otras cosas, el orador destaca cinco omisiones: i) no asegurarse de que su determinación de la existencia de una amenaza de daño importante estuviera basada en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas; ii) no demostrar que la modificación de las circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el dumping o la subvención causarían un daño era claramente prevista e inminente; iii) no considerar adecuadamente todos los factores pertinentes a la determinación de la existencia de una amenaza de daño importante; iv) no asegurarse de que los daños que pudieran ser provocados por otros factores en el futuro no se atribuyesen a las importaciones objeto de dumping y subvencionadas; y v) determinar inadecuadamente que eran inminentes nuevas importaciones objeto de dumping y subvencionadas, que esas importaciones probablemente exacerbarían la presión de los precios sobre los productores nacionales estadounidenses y que se produciría un daño importante a la rama de producción nacional. En consecuencia, y de conformidad con las disposiciones pertinentes del ESD, el GATT de 1994, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC, el Canadá solicita el establecimiento de un grupo especial para que examine estas cuestiones.

38. El representante de los Estados Unidos dice que su país lamenta que el Canadá haya decidido solicitar el establecimiento de un grupo especial. Tras un análisis minucioso y detenido, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) concluyó que una rama de producción de los Estados Unidos estaba amenazada de daño importante debido a las importaciones de madera

blanda precedentes del Canadá. El fundamento de esa conclusión está bien documentado en el informe de la USITC. La determinación de la USITC y los medios por los cuales se llegó a ella son plenamente conformes con las normas aplicables de la OMC. Los Estados Unidos instan al Canadá a que reconsidere su posición. En consecuencia, los Estados Unidos creen que sería prematuro establecer un grupo especial en este momento y, por esa razón, no están en condiciones de aceptar el establecimiento de un grupo especial en la presente reunión.

39. El OSD toma nota de las declaraciones y acuerda volver a ocuparse de esta cuestión.

5. Argentina - Medida de salvaguardia definitiva sobre las importaciones de duraznos en conserva

a) Informe del Grupo Especial (WT/DS238/R)

40. El Presidente recuerda que, en su reunión de 18 de enero de 2002, el OSD estableció un grupo especial para que examinara la reclamación de Chile. El informe del Grupo Especial que figura en el documento WT/DS238/R ha sido objeto de distribución general el 14 de febrero de 2003, de conformidad con los Procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC, que figuran en el documento WT/L/452. Señala que el OSD tiene ahora ante sí el informe del Grupo Especial para su adopción a solicitud de Chile. Dice que este procedimiento de adopción se entiende sin perjuicio del derecho de los Miembros a exponer sus opiniones sobre el informe del Grupo Especial.

41. El representante de Chile indica que esta diferencia tiene su origen en una medida de salvaguardia definitiva impuesta por la Argentina a las importaciones de duraznos en conserva en agosto de 2001. Esta salvaguardia sigue estando vigente. Ésta no es la primera vez que un grupo especial de la OMC concluye que la Argentina ha aplicado una salvaguardia en contravención del artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias. Chile espera que la Argentina tenga mayor rigurosidad en el futuro y se abstenga de aplicar medidas a sabiendas de que serán impugnadas con éxito en la OMC. No se debe abusar de los derechos consagrados en la OMC. Chile ha pagado caro por esto y hasta hoy sus exportaciones de duraznos en conserva a la Argentina están paralizadas como consecuencia de una medida prohibitiva que la Argentina jamás tuvo derecho a aplicar. Las conclusiones del Grupo Especial son categóricas. La Argentina no demostró la existencia de una evolución imprevista de las circunstancias ni tampoco formuló una determinación del aumento de las importaciones, en términos absolutos o relativos. Además, en su determinación de la existencia de una amenaza de daño grave, la Argentina no evaluó todos los factores pertinentes que tenían relación con la situación de la rama de producción nacional; no dio una explicación razonada y adecuada de la manera en que los hechos respaldaban su determinación; ni constató que el daño grave fuera claramente inminente. El resultado de este informe es elocuente y sus conclusiones hablan por sí mismas a la hora de evaluar si la Argentina respetó o no sus obligaciones en el marco de la OMC. Ahora bien, además de las alegaciones anteriores, Chile alegó otras violaciones relacionadas con la causalidad; el informe que las autoridades competentes deben publicar; el alcance admisible de aplicación de la medida y su notificación. No obstante, el Grupo Especial decidió ejercer economía procesal y no formuló conclusiones a este respecto. A Chile le parece acertada la decisión del Grupo Especial. No porque Chile estime que sus argumentos eran infundados sino porque así el Grupo pudo emitir su informe en menos tiempo. Además, porque su decisión confirma que la medida de salvaguardia presentaba tal nivel de incompatibilidad que era innecesario seguir ahondando en las alegaciones.

42. Sobre esta base, necesariamente la Argentina debe poner término a la salvaguardia en cuestión en el más breve plazo posible. Asimismo, Chile espera que con este nuevo pronunciamiento en su contra, la autoridad investigadora argentina sea más cautelosa en sus investigaciones y en sus recomendaciones. No es un hecho menor que, frente a los mismos antecedentes, dos de los cuatro

Directores de la Comisión Nacional de Comercio Exterior se hayan opuesto enérgicamente a la imposición de la medida. Tampoco es menor el hecho de que precisamente dichos Directores hayan fundado su voto en la ausencia de los requisitos de fondo que el Grupo Especial posteriormente confirmó. Por último, tampoco es un hecho menor que esta Comisión haya manejado arbitrariamente las cifras con el propósito deliberado de determinar la existencia de un aumento absoluto o relativo de las importaciones allí donde nunca lo hubo. Por todo lo anterior, Chile solicita que este informe sea adoptado por el OSD y que la Argentina ponga la medida impugnada en conformidad con sus obligaciones ante la OMC de la única forma posible a la luz de las constataciones del Grupo Especial; esto es, poniendo término a la salvaguardia en el más breve plazo posible.

43. El representante de la Argentina dice que su país desea intervenir con motivo de la adopción del informe del Grupo Especial que el OSD tiene ante sí en la presente reunión. Ante todo, la Argentina agradece el esfuerzo de los integrantes del Grupo Especial en resolver un caso que resultó particularmente complejo. Por cierto, su país mantiene reservas acerca de las constataciones que el Grupo Especial ha hecho respecto de algunas de las alegaciones de la parte reclamante en lo que hace al cumplimiento del Acuerdo sobre Salvaguardias por la Argentina. Sin embargo, su país quiere manifestar su satisfacción con la constatación del Grupo Especial según la cual la autoridad investigadora argentina no actuó de modo incompatible con las obligaciones que le corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 2 y del párrafo 1 b) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias en el sentido de que realizara una constatación de la existencia de amenaza de daño grave basándose en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. En el contexto descrito, la Argentina ha decidido no utilizar su derecho a apelar, teniendo en cuenta que los recursos del sistema son limitados y deben ser utilizados en forma prudente. A la luz de sus obligaciones ante la OMC, es intención de la Argentina seguir los pasos previstos en el ESD, por lo cual continuará analizando el informe del Grupo Especial en los próximos 30 días y, conforme a lo prescrito en el párrafo 3 del artículo 21 del ESD, informará al OSD de su propósito en cuanto a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD pertinentes a este caso.

44. El representante de las Comunidades Europeas dice que las CE han participado como terceros en el procedimiento de este Grupo Especial porque tienen un interés sustancial en la medida dados sus efectos negativos con respecto a las exportaciones de las CE. Por consiguiente, las CE acogen con satisfacción el resultado del procedimiento del Grupo Especial, el cual confirma en gran medida sus puntos de vista. Las CE instan a la Argentina a que retire la medida lo antes posible, como única alternativa viable para cumplir las resoluciones adoptadas en este asunto.

45. El OSD toma nota de las declaraciones y adopta el informe del Grupo Especial que figura en el documento WT/DS238/R.

6. Estados Unidos - Subvenciones al algodón americano (upland)

a) Declaración del Brasil con respecto al Anexo V del Acuerdo SMC

46. El Presidente dice que este punto está incluido en el orden del día de la presente reunión a petición del Brasil, e invita al representante del Brasil a que lo presente.

47. El representante del Brasil dice que el 18 de marzo de 2003 a petición del Brasil y de conformidad, entre otras cosas, con el párrafo 4 del artículo 7 del Acuerdo SMC, el OSD estableció un grupo especial con respecto a las subvenciones concedidas por los Estados Unidos al algodón americano (upland). Desde su primera solicitud de establecimiento de un grupo especial, de fecha 7 de febrero de 2003, el Brasil pidió al OSD que iniciara los procedimientos establecidos en el Anexo V del Acuerdo SMC. Es importante que los Miembros sepan que el único requisito para la obtención de las pruebas con arreglo a los procedimientos del Anexo V consiste en someter el asunto al OSD de conformidad con el párrafo 4 del artículo 7 del Acuerdo SMC. Al invocar el Anexo V,

el OSD ha de designar, conforme al párrafo 4 del mismo Anexo, un representante que facilite el proceso de acopio de información, que se ha de concluir dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se le haya sometido el asunto al OSD. En dos ocasiones, los Estados Unidos han bloqueado la designación de este representante, a saber, el 18 de marzo y posteriormente el 31 de marzo de 2003 en la reunión especial del OSD solicitada por el Brasil. En ambas ocasiones no se efectuó la designación porque los Estados Unidos se opusieron a la designación del representante a menos que, como se informó al OSD el 31 de marzo, el Brasil acordara que se suspendieran los procedimientos establecidos en el Anexo V hasta que el Grupo Especial adoptara una resolución sobre la aplicabilidad y la validez del Anexo V, resolución que no se podrá adoptar hasta que finalicen las actuaciones del Grupo Especial y mucho después de que el Anexo V haya dejado de ser útil. En otras palabras, los Estados Unidos estarán de acuerdo con la designación de un facilitador siempre que se impida que éste facilite el proceso de acopio de información de manera oportuna y eficaz. Esto viene a ser una especie de círculo sin escapatoria (Catch 22).

48. El 1° de abril de 2003, el Brasil, aunque lamentaba que el proceso de acopio de información aún no pudiera contar con la presencia de un representante debido a maniobras de procedimiento de los Estados Unidos, envió una lista de preguntas a los Estados Unidos y a los mercados de terceros países que el Brasil ha identificado. Varios de estos países han manifestado su disposición a cooperar en el proceso, como lo exige el párrafo 1 del Anexo V. La falta de cooperación por parte de los Estados Unidos sigue siendo sorprendentemente reveladora. Con el fin de dar otra oportunidad de llegar a un resultado satisfactorio en esta situación, el Brasil pidió al Presidente, el 10 de abril de 2003, que inmediatamente después de la presente reunión volviera a convocar la reunión suspendida el 31 de marzo. Como el Brasil ha indicado al Presidente y a los Estados Unidos, la finalidad de esa reunión sería designar, por medio de una decisión del OSD, al facilitador que debe acompañar los procedimientos, según lo previsto en el párrafo 4 del Anexo V. Pese a la solicitud formal del Brasil, el Presidente decidió no volver a convocar la reunión.

49. El Brasil lamenta lo inusualmente difícil que ha resultado contar con un facilitador. Le preocupan cada vez más los enfrentamientos y rodeos procesales, los cuales podrían afectar a sus derechos en la presente diferencia y privan de sentido a los procedimientos del Anexo V. En primer lugar, el Brasil no ve por qué el Presidente aún no ha pedido al OSD que adopte una decisión sobre el asunto de la designación del representante, como lo exige de manera explícita el párrafo 4 del Anexo V y como lo ha solicitado el Brasil en repetidas ocasiones. Si en las consultas y en reuniones anteriores ha quedado claro que las partes tienen distintas opiniones sobre esta cuestión, el asunto se debería haber sometido al OSD de inmediato para que éste adoptara una decisión. La afirmación de que un acuerdo entre las partes es un requisito previo para someter el asunto al OSD significa crear un nuevo obstáculo de procedimiento que carece absolutamente de fundamento jurídico. En segundo lugar, el Brasil lamenta la decisión del Presidente de no volver a convocar la reunión suspendida a pesar de que el Brasil hizo una solicitud formal a este efecto. La decisión de no volver a convocar la reunión suspendida cierra la posibilidad de llegar a una solución, o al menos a un resultado satisfactorio, durante la reunión. Asimismo, impone más retrasos indebidos en el procedimiento. El hecho de manifestar el deseo de que se llegue a un acuerdo entre las partes no compensa la falta de una decisión del OSD. Establecer como condición para la reanudación de esa reunión un acuerdo entre las partes equivale a delegar en la parte demandada la función del OSD. La creación de un nuevo obstáculo de procedimiento vendría a ser otro círculo sin escapatoria, equivalente al de la alegación relacionada con la Cláusula de Paz presentada por los Estados Unidos en la anterior reunión extraordinaria del OSD.

50. Resulta deplorable, aunque comprensible, que los Estados Unidos recurran a cualquier maniobra de procedimiento para socavar la efectividad del procedimiento establecido en el Anexo V. No obstante, el Brasil siente inquietud ante la perspectiva de que el OSD se vea arrastrado a una situación de impotencia por no haber procedido de conformidad con los textos jurídicos. Lo que debía ser un procedimiento sencillo con arreglo al ESD y el Acuerdo SMC ha pasado a ser en realidad

un medio para evaluar la eficacia del mecanismo de solución de diferencias de la OMC. Es una cuestión de importancia sistémica, al igual que todas las cuestiones sistémicas y, si no se le presta la debida atención en el OSD, volverá a afectar a los Miembros mucho después de que este Grupo Especial se pronuncie sobre la compatibilidad de las subvenciones de los Estados Unidos al algodón americano (upland) con las normas de la OMC. En conclusión, el Brasil vuelve a solicitar la designación del representante, cuyas funciones aún pueden ser de utilidad en esta etapa del procedimiento. Por consiguiente, de conformidad con el párrafo 4 del Anexo V y el artículo 17 del Reglamento de las reuniones del Consejo General, el Brasil solicita una vez más que el Presidente pida al OSD que adopte una decisión sobre este asunto.

51. El representante de los Estados Unidos afirma que la decisión del Brasil de invocar el Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo SMC antes de que expire la Cláusula de Paz del Acuerdo sobre la Agricultura plantea cuestiones de procedimiento nunca antes tratadas en el OSD, particularmente con respecto a la interacción entre la Cláusula de Paz y las disposiciones del Acuerdo SMC. Los Estados Unidos han abordado estas cuestiones con espíritu de cooperación y han propuesto una secuencia de acontecimientos que harían posible una solución ordenada y lógica de estas cuestiones, sin perjuicio de la posición de ninguna de las partes. El Brasil desea recurrir a los procedimientos del Anexo V para obtener información de los Estados Unidos y los terceros países Miembros con respecto a las alegaciones de perjuicio grave presentadas por el Brasil. Pero la Cláusula de Paz impide que se entable una demanda sobre la base de esas alegaciones a menos que el Brasil demuestre que la Cláusula de Paz resulta inaplicable. Los procedimientos del Anexo V sólo se pueden utilizar para establecer alegaciones de perjuicio grave de conformidad con el Acuerdo SMC. Contrariamente a lo sugerido por el Brasil en la reunión anterior del OSD, no se pueden utilizar para compilar información con objeto de demostrar si la Cláusula de Paz es aplicable en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura. Por consiguiente, el perjuicio recaería sobre los Estados Unidos si se le exige que obtenga y facilite información relacionada con medidas que están "exentas de medidas basadas en" los artículos 5 y 6 del Acuerdo SMC de conformidad con la Cláusula de Paz.

52. En su intento de salvar las diferencias entre las diversas posiciones, los Estados Unidos han propuesto una manera pragmática de salvaguardar las posiciones de las dos partes. Con arreglo a la propuesta de los Estados Unidos, en el caso improbable de que el Grupo Especial determine que la Cláusula de Paz no excluye las alegaciones del Brasil, entonces las partes podrán entablar el procedimiento previsto en el Anexo V. El Brasil no ha aceptado esta propuesta. En lugar de ello, ha presentado preguntas como si se pudiera recurrir al proceso previsto en el Anexo V. Al proceder de esa forma, el Brasil pide que los Miembros asuman la carga de facilitar información que, a la luz de la Cláusula de Paz, resultaría completamente irrelevante para las actuaciones del Grupo Especial. Los Estados Unidos esperan contar con la cooperación del Brasil para encontrar una salida a las cuestiones de procedimiento planteadas. Sigue en pie la propuesta de los Estados Unidos de permitir el recurso al proceso previsto en el Anexo V si el Grupo Especial decide que la Cláusula de Paz no es aplicable.

53. Asimismo, en respuesta a la última cuestión planteada por el Brasil, los Estados Unidos observan que el punto del orden del día de la presente reunión se refiere solamente a la declaración del Brasil con respecto al Anexo V, no a la designación del representante del OSD con arreglo al párrafo 4 del Anexo V ni a la decisión del OSD en virtud del párrafo 2 del Anexo V de iniciar los procedimientos del Anexo V. En cualquier caso, los Estados Unidos siguen considerando prematuro designar un representante del OSD en esta reunión. Como los Estados Unidos han explicado en la reunión del OSD del 31 de marzo y en la presente reunión, el Brasil no tiene derecho a utilizar los procedimientos del Anexo V en este momento. Los Estados Unidos han propuesto una manera pragmática de salvaguardar las posiciones de las dos partes y confían en contar con la cooperación del Brasil en la búsqueda de una solución.

54. El representante de las Comunidades Europeas dice que el OSD ya ha decidido establecer un grupo especial en este caso sobre la base de la solicitud presentada de conformidad con el párrafo 4

del artículo 7 del Acuerdo SMC y con el mandato que incluye los artículos 5 y 6 del Acuerdo SMC. A juicio de las CE, el OSD tiene que adoptar una decisión en esta reunión con respecto a la solicitud del Brasil de nombrar un facilitador. La obligación dimanante del párrafo 4 del Anexo V es clara e incondicional. Con respecto al planteamiento de los Estados Unidos, las CE consideran que ésta es una cuestión de jurisdicción que no la pueden decidir el OSD ni el Presidente, sino únicamente el Grupo Especial. En consecuencia, al seguir frustrando los derechos del Brasil e impedir que el OSD cumpla su obligación, los Miembros están por atravesar una situación difícil en la que no es aplicable el Anexo V. Las CE desean saber por qué aún no se ha presentado la cuestión al OSD para que éste cumpla su función.

55. El Presidente dice que desea responder a algunas preguntas formuladas por las delegaciones en la presente reunión. Con respecto a la solicitud del Brasil de volver a convocar la reunión que se había suspendido el 31 de marzo, recuerda que, de conformidad con el acuerdo concertado entre el Brasil y los Estados Unidos antes de esa reunión, señaló en sus observaciones finales que la reunión se volvería a convocar una vez que se llegara a un acuerdo. Esa declaración fue aceptada por todos los Miembros presentes en aquella reunión, incluido el Brasil. En consecuencia, dadas las persistentes diferencias entre las partes, no era posible volver a convocar la reunión suspendida. Esto se entiende sin perjuicio de cualquier otro derecho que el Brasil tenga en este sentido. Con respecto a la pregunta de por qué el OSD no está en condiciones de adoptar la decisión de nombrar un facilitador, es evidente que el OSD sólo podrá adoptar una decisión sobre este asunto si la decisión se adopta por consenso, y hay partes que aún no han aceptado el hecho de que han de seguirse determinados procedimientos. En este momento el OSD no puede llegar a una decisión sobre este asunto.

56. El representante del Brasil dice que, antes de la reunión del OSD de 31 de marzo, el Brasil y los Estados Unidos habían acordado suspender la reunión. El Brasil no entró en la cuestión de volver a convocar la reunión una vez que se llegara a un acuerdo. A entender del Brasil, la declaración del Presidente expresa el deseo de que se llegue a ese acuerdo y no una condición para volver a convocar la reunión, como ha indicado el Presidente. Es difícil imaginar que sólo se pueda decidir sobre determinada cuestión si la parte demandada está dispuesta a ceder ante argumentos de otras partes. Con respecto a la cuestión que se ha presentado al OSD, el orador afirma que lo importante es que el Presidente, sobre la base de sus consultas informales, está formulando un juicio de que no es posible adoptar una decisión en este momento. Sin embargo, una vez que el Brasil pida al Presidente que presente este asunto al OSD para que adopte una decisión, el Presidente tendrá que abordar esta cuestión y, de conformidad con el reglamento, el OSD tendrá que llegar a una conclusión, pero el Presidente no puede asumir las funciones del OSD, como se indica en el párrafo 4 del Anexo V. Corresponde a los Miembros del OSD llegar a una decisión, de conformidad con el reglamento, y no al Presidente tomar la decisión de no someter el asunto a la consideración del OSD. Por consiguiente, el Brasil no cree que sea función del Presidente crear nuevos obstáculos de procedimiento y, de ser así, desea preguntar qué se requiere para que el Presidente someta el asunto al OSD a fin de que éste adopte una decisión.

57. El representante de las Comunidades Europeas señala que el Presidente ha indicado que se requiere consenso para que el OSD adopte una decisión sobre este asunto y, según el propio Presidente, dicho consenso no existe. El orador desea saber en qué fundamentos jurídicos se basó el Presidente para decidir que la decisión conforme al párrafo 4 del Anexo V tendría que ser adoptada por consenso. La segunda cuestión es que, si esto es evidente, el Presidente debería someter este asunto al OSD. Las CE comparten la opinión manifestada por el Brasil de que no corresponde al Presidente decidir si es evidente que existe o no existe consenso. Se debería presentar el asunto al OSD y los Miembros tendrán que determinar si hay consenso o mayoría o cualquier otra situación.

58. El representante de los Estados Unidos dice que ha escuchado las observaciones formuladas por las delegaciones. Estas observaciones se han apartado considerablemente del punto que el Brasil inscribió en el orden del día de la presente reunión, que se trataba de una declaración relativa al

Anexo V. Si bien es cierto que el Brasil ha solicitado la reanudación del examen del punto que se ha suspendido en la reunión del OSD de 31 de marzo, el orador desea recordar a los presentes que dicho punto se había suspendido de conformidad con la decisión del OSD que se estableció la base sobre la cual el punto quedaría suspendido. Los Estados Unidos en esa ocasión no eran partidarios de suspender el debate sobre ese punto, pero accedieron a la solicitud del Brasil de que se procediera de ese modo. Por consiguiente, a los Estados Unidos les resulta difícil comprender los motivos que tiene el Brasil para modificar la base sobre la cual se llevaría adelante este punto. También desean señalar que las posiciones del Brasil y las CE acerca de esta cuestión partían del supuesto de que el Anexo V era aplicable. Como ya han explicado los Estados Unidos, ese supuesto no es correcto. Los Estados Unidos desean reiterar sus observaciones anteriores de que han mantenido algunas conversaciones con el Brasil y esperan que estas conversaciones continúen. El orador recuerda que su país ha manifestado al Brasil y al Presidente en consultas informales que la manera de avanzar sería que las partes siguieran examinando esta cuestión con la esperanza de persuadir al Brasil de que acepte la sugerencia formulada por los Estados Unidos.

59. El representante de las Comunidades Europeas dice que las CE desean recordar que de conformidad con el párrafo 2 del Anexo V, "[e]n los casos en que, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 7, se someta la cuestión al OSD, éste, si se le pide, iniciará el procedimiento para obtener del gobierno del Miembro que concede la subvención la información necesaria para establecer la existencia y cuantía de dicha subvención ...". Por consiguiente, está claro para las CE que la solicitud del Brasil ha dado inicio al procedimiento del Anexo V. No hay ninguna condición y es clara la obligación que tiene el OSD de iniciar el procedimiento. El párrafo 4 del Anexo V se refiere a la designación del facilitador. Esta designación también supone una obligación para el OSD. De ahí que las CE deseen saber por qué, amparada en el denominado consenso, la opinión de una de las partes en la diferencia podría prevalecer y paralizar el funcionamiento normal del OSD en el desempeño de su cometido. Como han señalado las CE, el planteamiento de los Estados Unidos que puede tener validez es una cuestión de jurisdicción que ha de ser decidida por el Grupo Especial. No corresponde al OSD ni a su Presidente decidir sobre esta cuestión continuando la aplicación de la disposición del Anexo V a fin de impedir que el OSD cumpla su obligación de adoptar una decisión. El orador vuelve a preguntar cuáles son los fundamentos jurídicos que han llevado al Presidente a creer que la aplicación del Anexo V requiere consenso.

60. El representante del Brasil dice que desea aclarar la diferencia entre la propuesta de acuerdo presentada por los Estados Unidos y la presentada por el Brasil. Por una parte, los Estados Unidos han propuesto que el asunto quedara sujeto a la decisión del Grupo Especial y que éste, una vez que adoptara una decisión y concluyera su labor, podría constatar que el Anexo V habría sido aplicable y que habría sido una buena idea reunir información en virtud de dicho Anexo. Por otra parte, el Brasil propuso que se procediera con la designación del facilitador y con el proceso de acopio de información. Los Estados Unidos mantendrían su derecho de notificar al Grupo Especial su punto de vista de que la información en cuestión no es aplicable y que resulta irrelevante. En ese caso, el proceso de acopio de información no habría ocasionado ningún daño a los Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de ello, los Estados Unidos han propuesto acceder a un procedimiento que quitaría eficacia al Anexo V.

61. El representante de los Estados Unidos dice que, dado que el Brasil ha descrito la propuesta de los Estados Unidos, desea aclarar el contenido de ésta. La propuesta consiste en que el Grupo Especial adopte una decisión sobre la cuestión preliminar de si la Cláusula de Paz se aplica o no en una etapa temprana del procedimiento. En el caso improbable de que la decisión sea efectivamente que la Cláusula de Paz no se aplica a las medidas en cuestión, se podría dar curso al procedimiento establecido en el Anexo V. En ese momento, tanto los Estados Unidos como el Brasil y los más de 15 terceros países Miembros interesados que ha identificado el Brasil podrían participar en los procedimientos previstos en el Anexo V. El procedimiento propuesto por los Estados Unidos equilibra los intereses de las partes, constituye una manera práctica de avanzar y no da lugar, como ha

sugerido el Brasil en la reunión anterior, a que los procedimientos del Anexo V se utilicen para obtener pruebas sobre la cuestión relativa a la Cláusula de Paz.

62. El representante de Chile señala que a su delegación le preocupa el peligroso precedente de que en el OSD se estén planteando cuestiones de procedimiento, las cuales siempre se han decidido en los grupos especiales. Chile señala que ésta no es la primera vez que los Estados Unidos han procedido de esta manera pues ya intentaron hacerlo en otra ocasión.

63. El representante del Brasil dice que el párrafo 5 del Anexo V establece que "El proceso de acopio de información que se expone en los párrafos 2 a 4 se finalizará en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que se haya sometido la cuestión al OSD en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 7 del Acuerdo SMC". En consecuencia, las partes acumulaban ya un gran retraso en este proceso de acopio de información. El procedimiento propuesto por los Estados Unidos iría en contra de lo dispuesto en el Anexo V y de hecho, si fuera aprobado, también retrasaría el procedimiento del Grupo Especial en detrimento del calendario establecido en virtud del ESD.

64. El representante de las Comunidades Europeas reconoce que al Presidente le es difícil responder a la pregunta formulada por las CE con respecto a los fundamentos jurídicos en que se habría de basar el OSD para llegar a una decisión sobre la solicitud del Brasil de que dicho Órgano cumpla la obligación que le corresponde en virtud del Anexo V. Las CE aún esperan respuesta del Presidente o de la Secretaría en relación con los fundamentos jurídicos. Señala a la atención de los presentes el párrafo 4 del artículo 2 del ESD, donde se estipula que "[e]n los casos en que las normas y procedimientos del presente Entendimiento establezcan que el OSD debe adoptar una decisión, se procederá por consenso". Sin embargo, esto se aplica cuando el OSD cumple una función conforme a lo dispuesto en el ESD, pero en este caso el OSD actúa en el marco del Acuerdo SMC. El orador recuerda que el párrafo 1 del artículo 1 del ESD establece que "[l]as normas y procedimientos del presente Entendimiento se aplicarán sin perjuicio de las normas y procedimientos especiales o adicionales que en materia de solución de diferencias contienen los acuerdos abarcados y se identifican en el Apéndice 2 del presente Entendimiento". En consecuencia, a efectos de la aplicación del Anexo V, el OSD actúa sobre la base del acuerdo abarcado -el Acuerdo SMC- y no del ESD. Por consiguiente, el párrafo 4 del artículo 2 del ESD no es aplicable. De ahí la pregunta de cuáles son los fundamentos jurídicos en que se basa el Presidente para considerar que se requiere consenso para que el OSD adopte una decisión con respecto a la obligación prevista en el Anexo V del Acuerdo SMC.

65. El representante de Benin indica que su delegación desea asociarse a las declaraciones formuladas por el Brasil y las CE.

66. El Presidente dice que a su entender este punto del orden del día, que se refiere a la declaración del Brasil con respecto al Anexo V del Acuerdo SMC, no requiere que se adopte una decisión en la presente reunión. Habida cuenta de las diferencias existentes entre las delegaciones, desea proponer que el OSD tome nota de las declaraciones formuladas y acuerde convocar una reunión informal inmediatamente después de la presente reunión para seguir examinando esta cuestión.

67. El representante del Brasil dice que, dados los antecedentes de esta cuestión, preocupa a su delegación el hecho de que el Presidente no haya abordado la cuestión que los ocupa. Por consiguiente, no es posible pasar al modo informal y seguir este debate indefinidamente. Nada impide que el Presidente lleve este asunto ante el OSD para que se adopte una decisión, aunque el punto se haya inscrito en el orden del día como declaración, pero si el Presidente lo considera necesario, el Brasil desea que se indique, durante la reunión formal, exactamente qué se requeriría para que el Presidente someta este asunto al OSD para que adopte una decisión. Sería útil hacerlo en este momento, puesto que en otra ocasión el Presidente se refirió al consenso, y su percepción de la

falta de consenso le ha impedido someter este asunto al OSD para que se adopte una decisión. Es importante que, en el modo formal, el Presidente deje constancia de cuáles son las condiciones necesarias para que pida al OSD que adopte una decisión sobre este asunto, así como de su opinión respecto del procedimiento de adopción de decisiones que sería aplicable en estas circunstancias.

68. El Presidente invita a la Secretaría a que responda a algunas preguntas en relación con los aspectos jurídicos de las cuestiones que se examinan.

69. El representante de la Secretaría (División de Asuntos Jurídicos) dice que a su entender la pregunta formulada por las CE, a la que acaba de aludir el Brasil, se refiere a cuál es el procedimiento legal de adopción de decisiones para que el OSD designe un representante de conformidad con el Anexo V del Acuerdo SMC. Tiene entendido que esa decisión tendría que ser adoptada por consenso positivo, como dispone el ESD respecto de todos los procedimientos a excepción de los que requieren consenso negativo de conformidad con lo dispuesto en el ESD.

70. El representante del Brasil dice que, como han indicado las CE, la norma del consenso se aplica a la adopción de decisiones por el OSD cuando las normas y procedimientos del ESD prevén que el OSD adopte una decisión. Sin embargo, si se adopta una decisión conforme al acuerdo abarcado, sería útil que la Secretaría indicara si el OSD en un caso así, cuando actúe en tanto que Consejo General, debería adoptar la decisión por consenso. Esto no resulta claro en la lectura del texto y de hecho el orador pregunta cuál sería el significado del párrafo 4 del artículo 2 del ESD, en particular de su primera frase. Recuerda que en otra reunión el Presidente decidió no presentar este asunto al OSD para que adoptara una decisión debido a su evaluación, basada en las consultas informales que había efectuado, de que no existía consenso. Sin embargo, incluso si el Presidente considera que se requiere consenso, no está facultado para adoptar una decisión sobre la base de su propia evaluación, sino que debería someter este asunto al OSD para que éste adopte una decisión, y entonces el OSD decidiría al respecto. En consecuencia, el Presidente ha de extraer las conclusiones del resultado del proceso de adopción de decisiones por el OSD.

71. El representante de las Comunidades Europeas observa que el representante de la Secretaría se refirió en su declaración al consenso positivo como norma general sobre adopción de decisiones del OSD. Sin embargo, esta norma sólo se aplica si el OSD procede sobre la base del ESD. Por consiguiente, cuando el OSD adopte una decisión y actúe de conformidad con lo dispuesto en el ESD, y a menos que exista una norma específica en el ESD, debe hacerlo por consenso. Sin embargo, en este caso hay que adoptar medidas de conformidad con el Acuerdo SMC y, en ese sentido, el párrafo 2 del artículo 1 del ESD contiene una clara cláusula que dispone que "[l]as normas y procedimientos del presente Entendimiento se aplicarán sin perjuicio de las normas y procedimientos especiales o adicionales que en materia de solución de diferencias contienen los acuerdos abarcados y se identifican en el Apéndice 2 del presente Entendimiento. En la medida en que exista una discrepancia entre las normas y procedimientos del presente Entendimiento y las normas y procedimientos especiales o adicionales enunciados en el Apéndice 2, prevalecerán las normas y procedimientos especiales o adicionales enunciados en el Apéndice 2". Las CE consideran que el OSD tiene que adoptar medidas de conformidad con el Acuerdo SMC y el Anexo V. En consecuencia, está claro que deberían prevalecer las normas del Acuerdo SMC y del Anexo V. El orador pregunta por lo tanto en qué parte del Anexo V se dispone que el OSD habrá de adoptar decisiones por consenso positivo. A su juicio, se trata de una obligación y una condición claras. Los párrafos 2 y 4 del Anexo V no especifican que el OSD ha de designar un representante por consenso. En lugar del consenso, sería necesaria la mayoría simple. Por eso pide al Presidente que someta este asunto al OSD para que éste pueda cumplir su obligación.

72. El representante de la Secretaría (División de Asuntos Jurídicos) dice que a su entender, salvo indicación en contrario, la norma del consenso positivo se aplica con respecto al ESD, y observa que la nota 1 del ESD establece que "[s]e considerará que el OSD ha adoptado una decisión por consenso

sobre un asunto sometido a su consideración cuando ningún Miembro presente en la reunión del OSD en que se adopte la decisión se oponga formalmente a ella". Con todo, si un asunto se somete al OSD y éste tiene que adoptar una decisión, se requieren para ello medidas positivas del OSD.

73. La representante del Japón dice que su delegación desea plantear una cuestión de procedimiento. El Japón no tiene ningún interés en este asunto y no ha participado como tercero en el procedimiento, pero respeta los procedimientos del OSD y su funcionamiento eficaz y eficiente. El Japón tiene entendido que el procedimiento previsto en el Anexo V del Acuerdo SMC sólo se ha aplicado una vez, en el asunto "Indonesia - Automóviles". El Japón fue parte en esa diferencia, pero no invocó el procedimiento establecido en el Anexo V del Acuerdo SMC. Lo invocaron las CE y los Estados Unidos. En consecuencia, el Japón pide aclaración a la Secretaría o a las CE respecto de lo que sucedió exactamente en el OSD cuando éste decidió proponer la candidatura del Sr. S. Harbinson como facilitador en virtud del Anexo V.

74. El representante del Brasil observa, con respecto a la última explicación proporcionada por la Secretaría, que la nota 1 del ESD explica el significado del consenso al que se hace referencia en el párrafo 4 del artículo 2 del ESD, pero la duda que se examina no es sobre el significado del consenso, sino sobre la aplicabilidad de la norma del consenso prevista en el ESD a una cuestión que se deriva del Acuerdo SMC. Por consiguiente, lo que entiende de la explicación proporcionada por la Secretaría es que la primera frase del párrafo 4 del artículo 2 del ESD carece de significado y que el párrafo 4 establece que cuando el OSD adopte una decisión deberá hacerlo por consenso.

75. El representante de las Comunidades Europeas observa además, con respecto a la referencia a la nota 1, que la falta de consenso sólo se puede establecer cuando se presente una decisión al OSD y cuando un Miembro se oponga formalmente a una decisión. Por consiguiente, se pregunta cómo podría el Presidente considerar evidente que no existe consenso si no se ha presentado el asunto al OSD para que éste adopte una decisión. Incluso si efectivamente se requiere consenso, el Presidente tiene la obligación de presentar el asunto al OSD y, si un Miembro se opone formalmente a éste, corresponde entonces al Presidente determinar que no existe consenso. Sin embargo, hasta ese momento, no está dentro de las facultades del Presidente determinar si el consenso es probable o no. En consecuencia, el orador pone en duda que el Presidente pueda adoptar una decisión tan importante que impida al OSD cumplir su cometido y su obligación. El OSD tiene que ser neutral y esperar a que las partes sometan el asunto a decisión del Grupo Especial. Por lo tanto, las referencias a la nota 1 impiden que el Presidente se abstenga de presentar el asunto al OSD para que éste adopte una decisión. Además, el orador aún desea recibir una respuesta de la Secretaría a la pregunta relativa al procedimiento de adopción de decisiones con respecto al OSD cuando éste actúa en cumplimiento del Acuerdo SMC. Está claro el sentido del párrafo 4 del artículo 2 del ESD, pero también está claro que las normas y procedimientos en materia de trato especial y diferenciado contenidos en los acuerdos abarcados sustituyen a la norma ordinaria sobre adopción de decisiones cuando el OSD actúa en cumplimiento del acuerdo abarcado. Por consiguiente, el párrafo 4 del artículo 2 del ESD no es aplicable en la situación que los ocupa. Por eso desea saber cuál es la disposición del Acuerdo SMC o del Anexo V que permite al Presidente y a la Secretaría considerar que se requiere consenso en el caso que se examina.

76. El representante de los Estados Unidos desea hacer tres planteamientos. En primer lugar, con respecto a las observaciones que acaban de formular las CE, recuerda que en la reunión del OSD de 31 de marzo, los Estados Unidos indicaron que era prematuro nombrar a un representante del OSD en esa reunión. Eso fue lo que se acordó en esa ocasión y quizás sirva de consuelo a las CE con respecto a la determinación del Presidente de que había consenso o falta de consenso en ese momento. En segundo lugar, también desea dejar constancia de lo que se señaló antes, o sea, que el punto del orden del día se había suspendido a petición del Brasil. En tercer lugar, reitera que los Miembros se han apartado considerablemente del punto inscrito en el orden del día de la presente reunión. Debido al carácter del punto inscrito en el orden del día, ni su delegación ni otras delegaciones ni la Secretaría

estaban enteradas en absoluto de que efectivamente se examinaría la cuestión que ahora están debatiendo el Brasil y las CE con respecto a la reanudación del punto del orden del día que se había suspendido y a la definición de consenso. El Presidente ha presentado una propuesta de consultas o una reunión informal para que los Miembros sostengan un intercambio inicial de opiniones, y el representante de los Estados Unidos considera que muchos Miembros desearían consultar con las capitales o pedir instrucciones antes de manifestarse de forma definitiva sobre la cuestión que se examina. Los Estados Unidos apoyan la propuesta del Presidente y manifiestan su interés de seguir adelante con esta reunión.

77. El Presidente dice que, si bien este punto del orden del día no se someterá a decisión del OSD en la presente reunión, se ha debatido ampliamente sobre diversas cuestiones. Es evidente que existen diferencias de opinión y, habida cuenta de estas diferencias, desea reiterar su propuesta de que el OSD tome nota de las declaraciones formuladas y acuerde convocar una reunión informal, inmediatamente después de la presente reunión, para seguir examinando esta cuestión con las delegaciones que deseen hacerlo.

78. El OSD toma nota de las declaraciones y coincide con la propuesta del Presidente de celebrar una reunión informal, inmediatamente después de la presente reunión, para seguir examinando esta cuestión.

7. Candidaturas propuestas para su inclusión en la lista indicativa de expertos gubernamentales y no gubernamentales que pueden ser integrantes de grupos especiales (WT/DSB/W/226)

79. El Presidente señala a la atención de los presentes el documento WT/DSB/W/226, que contiene una nueva candidatura para su inclusión en la lista indicativa de conformidad con el párrafo 4 del artículo 8 del ESD. Propone que el OSD apruebe la candidatura que figura en el documento WT/DSB/W/226.

80. El OSD así lo acuerda.

8. Declaración del Presidente con respecto a una comunicación del Órgano de Apelación sobre el proyecto de modificaciones de los *Procedimientos de trabajo para el examen en apelación*

81. El Presidente, que interviene dentro del punto "Otros asuntos", señala a la atención de los Miembros la carta que recibió el 10 de abril de 2003 del Sr. James Bacchus, Presidente del Órgano de Apelación. La carta indica que, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por las delegaciones sobre el proyecto de modificaciones de los *Procedimientos de trabajo para el examen en apelación*, que figura en el documento WT/AB/WP/5, distribuido el 19 de diciembre de 2002, y tras haber concluido consultas con el Director General y el Presidente del OSD sobre este asunto, el Órgano de Apelación ha preparado la versión definitiva de las modificaciones. En la carta se incluye asimismo una explicación de los ajustes introducidos en las modificaciones propuestas que se distribuyeron en diciembre de 2002. Como indica el Órgano de Apelación, estas modificaciones entrarán en vigor el 1º de mayo de 2003 y en esa fecha también se distribuirá una versión revisada y refundida de los *Procedimientos de trabajo* del Órgano de Apelación en los tres idiomas de la OMC. El Presidente señala que la carta del Presidente Bacchus, que contiene las modificaciones, había sido distribuida con la signatura WT/AB/WP/6 el 10 de abril de 2003.

82. El OSD toma nota de la declaración.
